Documentos

Perspectivas para el Plan Arias en El Salvador y Guatemala*

RIORDAN ROETT

INTRODUCCIÓN

SEÑOR PRESIDENTE, agradezco la oportunidad que se me ha dado para presentarme ante este distinguido subcomité. Para hablar de Centroamérica hay que partir de la premisa de que es una región de vital interés para Estados Unidos. Más de la mitad del comercio exterior de Estados Unidos pasa por la Cuenca del Caribe; es por lo tanto indispensable que permanezcan abiertas las vías marítimas a través del Canal de Panamá. Además, Centroamérica tiene una gran importancia para la seguridad de Estados Unidos, por lo que no se puede tolerar ninguna amenaza directa contra Estados Unidos o sus aliados en esa región.

Para proteger sus intereses en Centroamérica, la política estadounidense debe concentrarse fundamentalmente en fomentar el desarrollo en esa región de instituciones políticas democráticas, por una razón muy sencilla: sólo sobre la base de instituciones de carácter civil y democrático se pueden sustentar la paz y la estabilidad. Y sólo éstas pueden evitar la posibilidad de intervenciones extranjeras indeseables. Nadie cree que se puedan crear fácilmente instituciones democráticas en Centroamérica; casi todos los países de esa región tienen un largo historial de gobiernos autoritarios opresivos. Además, Estados Unidos sólo hasta cierto punto puede controlar los hechos. Sin embargo, no puede aceptar términos medios. No se puede aceptar una situación en la que existan instituciones democráticas formales que sólo sirvan para ocultar el hecho de que el poder real no está en manos de la democracia

* Declaración del doctor Riordan Roett ante el Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Washington, D.C., 21 de octubre de 1987.

civil. Una democracia formal, en la práctica, es apenas mejor que un gobierno autoritario.

El Plan Arias nos presenta una buena oportunidad para avanzar en nuestros intereses, porque propone las bases para un proceso de reconciliación nacional y para reforzar las instituciones democráticas. Al provenir de las iniciativas de paz del Grupo Contadora, el Plan Arias es una extensión lógica de la labor diplomática que se ha venido realizando en esa región en los últimos años. En sólo dos meses y medio ha contribuido a realizar un adelanto importante, aunque limitado, en las gestiones para solucionar por la vía pacífica y sobre la base de principios democráticos, los problemas de la región. Aun si el Plan Arias cubre sólo algunos objetivos, el hecho de que el presidente de Costa Rica, Óscar Arnulfo Arias haya obtenido el Premio Nobel de la Paz, es un honor bien merecido.

Estoy consciente de la atención que el Congreso y este Comité le han prestado a Nicaragua y a su participación en el Plan Arias. Sin embargo, éste es un plan regional, y si ha de servir para resolver los problemas de un país de Centroamérica, tiene que servir para resolver los de todos los países de esa región. Por lo tanto quisiera llamar la atención de este Comité sobre otros dos países, también signatarios del convenio, a los que se suele pasar por alto: El Salvador y Guatemala.

EL SALVADOR

A tres años de la elección del presidente José Napoleón Duarte, El Salvador sigue en estado de violencia política. La guerra civil en El Salvador ha durado más que la guerra de los contras en Nicaragua y tal vez continúe por más tiempo. Han muerto ya más de 60 000 personas (más del 1% de la población de El Salvador); ha habido un desplazamiento del 25, o quizá del 30 por ciento, de la población.

Debido a esta situación peligrosa, desde hace seis años El Salvador ha sido objeto de especial atención para la política exterior de Estados Unidos. Desde 1981 Estados Unidos le ha dado a El Salvador un total de dos mil millones y medio de dólares en ayuda, lo cual coloca a ese país en el tercer lugar, después de Egipto e Israel, en su programa de ayuda exterior. Además, aunque la participación directa de Estados Unidos es pequeña, desde la guerra de Vietnam ninguna otra operación de contrainsurgencia ha recibido tanto apoyo como la de El Salvador.

Sin embargo, pese al monto enorme de la ayuda que se le ha dado y al entrenamiento que ha recibido el ejército de El Salvador, no se le ve fin a la guerra. En 1984 el gobierno estadounidense calculó cuatro

años más de guerra. En 1986 se amplió el plazo a cinco. Este año se volvió a corregir el cálculo. Ahora el término que se le da es de otros siete a diez años.

En vista de tan inquietantes perspectivas, el presidente Duarte se mostró hombre de ingenio y fuerza al firmar —y luego tomar medidas para llevarlo a cabo— el convenio de Guatemala. El acuerdo no pide concretamente el inicio de negociaciones entre los gobiernos y los grupos insurgentes, pero inspirados por el acuerdo, se reunieron el 5 de octubre de 1987 en San Salvador representantes del gobierno y de la guerrilla. A diferencia de los otros países signatarios del Plan, en El Salvador ya existían antecedentes de diálogo con la oposición armada. Los representantes de ambos grupos se habían reunido en La Palma el 15 de octubre de 1984, y un mes después en Ayagualo.

Las más recientes pláticas tuvieron como resultado que el gobierno y los insurgentes llegaran a un acuerdo para formar dos comisiones mixtas de cuatro miembros cada una, que se encargaran de llevar a cabo determinadas medidas contempladas en el Plan Arias. Ya se hicieron los preparativos para que el cese al fuego se lleve a efecto el 7 de noviembre de este año.

Además, en cumplimiento con los términos del acuerdo, se ordenó la repatriación para el 10 de octubre de cuatro mil asilados que se encontraban concentrados en el campamento para refugiados Mesa Grande en Honduras. Esta repatriación representa para el presidente Duarte el logro más positivo a la fecha dentro del Plan Arias. Se trata de personas que huyeron de El Salvador entre 1980 y 1983 a causa de una brusca operación del ejército para eliminar el apoyo que pudiera tener la insurgencia en las zonas de combate. El regreso de tantos asilados, muchos de ellos a las zonas de intensa actividad guerrillera, es una concesión importante por parte de los militares, aunque se haya obtenido a regañadientes. Sin embargo, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y algunos grupos religiosos han expresado el temor de que una vez que se desvanezca el interés internacional sobre la repatriación, los militares volverán a sus prácticas represivas.

Son positivos e importantes los pasos que se han dado en El Salvador para cumplir con el acuerdo de Guatemala. Insto a este Comité para que se les apoye y se observe cuidadosamente su avance.

Sin embargo, pienso que un análisis frío de la situación en El Salvador mostraría que es poco probable que allí se pueda llevar a cabo el Plan Arias.

El problema por el que atraviesa actualmente, que data más o menos de fines de los setenta, tiene profundas raíces socioeconómicas. En los años sesenta y setenta creció rápidamente la economía salvadoreña

gracias al uso intensivo de capital en la industria y en el campo. Pese a que aumentó considerablemente la productividad de los trabajadores y la exportación de productos agrícolas, los beneficios no se distribuyeron equitativamente entre todos los sectores de la sociedad salvadoreña. Creció el desempleo y bajaron los salarios. En consecuencia, se presentó una fuerte concentración en la tenencia de la propiedad y aumentó la marginación social de una gran parte de la población. Así, por ejemplo, en 1961 el 11% de la población de El Salvador se componía de campesinos sin tierras; en 1975 este grupo había aumentado a 40%. A medida que disminuían los salarios, aumentaba el número de trabajadores transmigrantes de temporada en la economía rural, hasta que ésta se convirtió en la forma principal de trabajo.

La marginación de trabajadores y campesinos en El Salvador en los años sesenta y setenta dio pie a un fuerte movimiento de reforma social y condujo a la formación de varios grupos de guerrilla revolucionaria. Lamentablemente, el gobierno no estuvo dispuesto a llevar a cabo la más mínima reforma. Se radicalizaron los sindicatos de trabajadores y campesinos, que podían haberse incorporado en un proceso democrático normal.

Para responder a estas presiones, se formó una coalición de reformistas civiles y militares que en octubre de 1979 derrocó al gobierno del general Carlos Humberto Romero. Tres meses después la junta reformista cedió ante la presión de un grupo de militares conservadores. Sobrevino un periodo de mucha represión en el que murieron miles de supuestos izquierdistas.

Después de varios años de incertidumbre, y cuando todo parecía indicar que los elementos de ultraderecha dominarían el proceso político, la presión ejercida por Estados Unidos junto con la ayuda que proporcionó hicieron posible las elecciones de 1984 en El Salvador. Ganó las elecciones José Napoleón Duarte. Es importante que se entienda que esta elección señaló sólo el principio y no el fin de un proceso de transición democrática. Todavía están vigentes muchos de los problemas institucionales y estructurales de El Salvador que tanto dificultaron esa transición. Son estos problemas estructurales los que limitan las posibilidades para una futura consolidación democrática y para que se lleve a cabo exitosamente ahí el Plan Arias. Los que más destacan son: 1) el poder de las fuerzas conservadoras en la política de El Salvador y 2) la influencia de las fuerzas armadas sobre las instituciones civiles.

El poder de las fuerzas conservadoras en la política de El Salvador se manifiesta en el fracaso de la reforma agraria. En un país como éste que depende de la agricultura, la distribución de la tierra es la clave para cualquier programa de reformas. Pero la élite terrateniente se ha

resistido desde hace mucho tiempo a cualquier intento, por más modesto que sea, de repartir las tierras. Para esas personas, la tierra no sólo representa la fuente de su riqueza, sino la base de su prestigio social. Por lo tanto se oponen a cualquier cambio. Y están dispuestos a tomar casi cualquier medida necesaria para evitar el cambio.

En 1980, bajo la égida de un gobierno de transición, se inició una modesta reforma agraria. A la fecha menos del 20% de las familias campesinas se ha beneficiado con este programa. Ante los obstáculos que interponen los grandes terratenientes, Duarte se ha visto en la imposibilidad de profundizar los efectos de la reforma agraria, en especial la conflictiva Fase II del programa, que afectaría las grandes fincas cafetaleras.

La cuestión de la tierra es el elemento central de las inequitativas condiciones socioeconómicas que tanto afectan a El Salvador, condiciones que se agravaron a causa de un cambio que se dio en la política del gobierno en 1986. En enero del año pasado, Duarte anunció unas medidas de austeridad económica muy impopulares, puesto que afectaban principalmente a los campesinos y a las clases trabajadoras. En el curso de un año se triplicó el precio de alimentos base como el arroz y el frijol. Aunque han aumentado los salarios, especialmente los del sector público, el costo de la vida se ha duplicado desde que Duarte asumió el poder. La situación empeoró a causa del terremoto de octubre pasado, que dejó a más de 100 000 salvadoreños sin vivienda.

Las condiciones a que me refiero tienen que verse en el contexto de una nación que ha sufrido casi ocho años de guerra civil. Los intentos del presidente Duarte por distribuir más equitativamente el costo de la guerra se han visto obstaculizados por la intransigencia de las fuerzas de ultraderecha. Por ejemplo, durante cuatro meses, a principios de este año, los partidos derechistas boicotearon las sesiones del Congreso Legislativo como protesta por el nuevo programa de impuestos iniciado por el gobierno de Duarte.

Debido a ese obstruccionismo ha sido difícil, por no decir imposible, que el Presidente ponga en marcha las reformas sociales que ofreció en su campaña presidencial de 1984. Ante ese fracaso se ha extendido la inestabilidad interna, situación que podría a la larga socavar las instituciones democráticas del Estado. Por ejemplo, las huelgas y las manifestaciones dirigidas por los trabajadores han asumido un tono más militante y de mayor confrontación, y crece la oposición entre los diversos grupos que antes apoyaron al partido demócratacristiano de Duarte.

El segundo y más inquietante impedimento estructural para la reforma en El Salvador, lo constituye el sector militar. Las fuerzas arma-

das, que han recibido más de seiscientos millones de dólares en ayuda militar directa, dependen casi totalmente del equipo y los recursos que les proporciona Estados Unidos. Aunque hemos tomado las medidas necesarias para modernizar las fuerza armadas, no hemos podido convencerlas de que acepten principios tan fundamentales como el respeto al gobierno civil.

Al incrementar Estados Unidos su ayuda militar para el gobierno salvadoreño a principios de los años ochenta el Congreso tuvo el tino de recomendar que la ayuda para las fuerzas armadas se condicionara a que disminuyeran en forma demostrable las violaciones a los derechos humanos, las que por este motivo decrecieron considerablemente. Sin embargo, no podemos sentirnos demasiado satisfechos de estos resultados, ya que continúan las desapariciones y los asesinatos de dirigentes de la oposición. Por lo demás, muy pocos integrantes de los escuadrones de muerte han sido castigados por la vía legal. La oposición política funciona en El Salvador bajo la amenaza de que en cualquier momento se vuelvan nuevamente operativos estos escuadrones.

Como ahora, por la ayuda estadounidense que recibe el sector militar de El Salvador, es inconcebible pensar en que los insurgentes izquierdistas puedan derrocar al gobierno, ya no tienen excusa las fuerzas armadas para violar los derechos humanos como lo han venido haciendo. Estados Unidos tendrá que condicionar sin ambages, al respeto por los derechos humanos, toda ayuda que le dé a ese sector.

Hay observadores que aducen que ha tenido lugar un cambio generacional e ideológico en el cuerpo de oficiales del sector militar salvadoreño, y que con este cambio va a ser aún más difícil tratar con ese grupo en el futuro cercano. Los oficiales más viejos —los acomodaticios que con tal de sacar provecho se avienen a lo que se les pida, sobre todo por parte de Estados Unidos— se están remplazando por una generación de oficiales más jóvenes y más seguros de sí mismos. Éstos son los que dirigen a las tropas en los campos de batalla. Han sido entrenados en la contrainsurgencia por los Estados Unidos. Pero distan mucho de abrazar ideales democráticos o de aceptar que sean civiles los que controlen lo que para ellos son asuntos de vital importancia militar como la guerra civil. Según el *Miami Herald* del 3 de agosto de 1987:

... lo que queda por verse es si, condicionada como está la ayuda militar de Estados Unidos al gobierno civil, los militares no nada más se hayan aprendido de memoria las palabras (democracia y derechos humanos). La pregunta que se hacen aún muchos de los que aplauden la política estadounidense, es si Estados Unidos, al rehabilitar la imagen de los oficiales además de su técnica de combate, no habrá creado un monstruo al que no pueda controlar ningún civil.

No parece haber tenido mucho efecto el contacto de ese grupo con nuestros principios éticos nacionales ni militares. Esos oficiales parecen tener una mentalidad diferente. Piensan que ganar la guerra civil es una meta que se debe perseguir a costa de cualquiera otra meta. Por lo tanto desconfían del empeño de Duarte por lograr una solución pacífica. Desprecian al gobierno estadounidense en tanto ese gobierno apoye al gobierno constitucional de El Salvador y defienda los derechos humanos. Creen que el respeto a la democracia significa un asentimiento de la guerrilla marxista. Para ellos, es mejor erradicar no sólo a los rebeldes sino también a sus simpatizantes.

Esa mentalidad se conjunta con la intransigencia de la élite terrateniente. Ese grupo equipara la más mínima reforma social con una revolución marxista. Para ellos, cualquier intento de Duarte de resolver las demandas de los rebeldes es una traición. Pese a que el sector militar se ha visto involucrado en una serie de secuestros de empresarios ricos para pedir rescate, los vínculos entre el sector empresarial y el militar son fuertes. Los dos grupos están de acuerdo en que hay que parar a los rebeldes a como dé lugar; impedir que se lleve a cabo cualquier intento de reforma, pues una conducirá a otras; y hacerle el juego a Estados Unidos para seguir obteniendo su vital ayuda militar y económica para equilibrar la balanza de pagos, sin aceptar los valores fundamentales estadounidenses.

No es probable que la nueva generación de oficiales intente un golpe militar. Saben que, de hacerlo, habría el riesgo de perder la ayuda militar que les proporciona Estados Unidos. La cuestión más bien es el poder y la influencia crecientes de estos oficiales por encima de los procesos constitucionales del gobierno civil. ¿Tendrán el derecho de veto en el gobierno civil? Hay quienes piensan que sí lo tienen.

Por otra parte, si bien fueron creativas e independientes las primeras medidas que tomó el presidente Duarte para cumplir con el Plan Arias, otras en cambio han sido distorsionadas por el tremendo poder del sector empresarial y de los militares en El Salvador. Por ejemplo, aunque el acuerdo de Guatemala no requiere que el gobierno entre en pláticas con los rebeldes armados, sí requiere que establezca comunicación con la oposición interna no armada, y que se forme una Comisión para la Reconciliación Nacional que incluya a representantes de los grupos de oposición. Sin embargo, los que nombró Duarte para participar en esa Comisión son, en general, personas que están con la derecha, con la sola excepción de uno que está, no con las fuerzas rebeldes, sino con la izquierda democrática.

Aunque no caben las comparaciones, en la Comisión para la Reconciliación Nacional de Nicaragua hay una representación más cen-

trista y balanceada, pese a haber sido nombrada por el presidente Daniel Ortega.

También se nota cierta ambigüedad en relación con el cumplimiento de lo que el Plan Arias llama "democratización". La oposición pacífica en El Salvador sigue siendo arriesgada en vista de las aprehensiones arbitrarias, los asesinatos y las desapariciones que siguen ocurriendo. Por lo tanto, aunque es cierto, por ejemplo, que no existen mecanismos formales de censura de los medios, siguen cerrados los periódicos y la radio de oposición que fueron perseguidos y clausurados en 1980 y 1981. Desgraciadamente aun el gobierno demócrata cristiano ha azuzado la intolerancia hacia cualquier intento de oposición política. Con frecuencia ha señalado como enemigos del Estado a los sindicatos y a otros grupos disidentes.

Para probar hasta dónde llega la apertura política en El Salvador, el líder exiliado del FDR (Frente Democrático Revolucionario), Rubén Zamora, piensa regresar definitivamente antes de la fecha límite propuesta por el Plan Arias. Aunque vinculado con el FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional), grupo predominantemente marxista-leninista, el FDR se formó en 1980 como una alianza de los socialdemócratas, demócratas cristianos disidentes y profesionistas de la clase media opuestos al gobierno militar. Muchos de sus dirigentes, incluso un hermano de Zamora, fueron eliminados por la represión militar que dejó, según la oficina de derechos humanos de la arquidiócesis, decenas de miles de víctimas. Dado ese antecedente, y aun dentro del clima de apertura política del Plan Arias, se considera que el regreso de Zamora constituirá un acto de gran valentía.

Aunque debemos estimular el regreso de los dirigentes políticos en destierro, no debemos ser ingenuos en cuanto a la motivación de un FMLN más radical y armado. Los grupos de la guerrilla demandan una participación en el poder como condición para cesar hostilidades. A su vez el gobierno insiste en que los insurgentes depongan las armas y se desistan de la violencia antes de participar en las próximas elecciones de 1988 y 1989. Pero esta exigencia sólo tiene sentido si el gobierno puede garantizar la seguridad física de los guerrilleros cuando se incorporen al proceso político. Si acaso, una invitación fidedigna por parte del gobierno al FMLN para que participe en el proceso político podría resultar en una desavenencia entre la oposición democrática legítima dentro del FDR y los extremistas ideológicos del FMLN. De negarse a participar en un proceso político abierto, se tacharía al FMLN de grupo radical incorregible.

Hay muchos obstáculos para que se aplique en El Salvador el Plan Arias, pero no deja de ser un programa que amerita el esfuerzo de lie-

varlo a cabo. Ha puesto en movimiento fuerzas que empujan a El Salvador hacia el rumbo de la reconciliación nacional. Este movimiento le da impulso al proceso de democratización que se inició con la elección del presidente Duarte.

GUATEMALA

El otro país al que quiero hacer referencia es Guatemala, del cual Estados Unidos se ha ocupado menos en los últimos años en cuanto a ayuda y apoyo. En ese sentido, tenemos menos posibilidades de influir allí, y menos opciones políticas para hacerlo. Quizá lo mejor que podemos hacer en relación con el nuevo gobierno civil de Guatemala es tener en cuenta lo que nos ha enseñado nuestra experiencia con las fuerzas armadas de El Salvador.

Guatemala, como El Salvador, es una nación que tiene un largo historial de poder militar represivo. El golpe militar que con el apoyo de la CIA derrocó en 1954 al gobierno democrático de Jacobo Arbenz, marcó el principio de un largo periodo de gobierno militar, sólo interrumpido entre 1966 y 1970. El 14 de enero de 1986 comenzó otro periodo de gobierno democrático civil con el presidente demócrata cristiano Vinicio Cerezo. Empero, hay razón para dudar de hasta dónde podrá llegar la democratización de Cerezo. Al iniciar su presidencia, reconoció que el sector militar controlaba definitivamente las instituciones civiles. No ha habido cambios de importancia en ese aspecto que pudieran modificar la apreciación inicial de Cerezo. Por ejemplo, no se llevará a juicio a ningún oficial del ejército por violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado, aunque entre 1975 y 1986 alrededor de cien mil guatemaltecos fueron víctimas de la represión militar. Por otra parte, Cerezo no ha podido reorganizar el G-2, famosa unidad de inteligencia militar que dirigió la mayor parte de la represión.

Como en El Salvador, la violencia política en Guatemala se dio a causa de un rígido sistema económico y político que no admitió reformas de ninguna especie. El 2% de la población es propietaria de aproximadamente 70% de la tierra cultivable y controla las exportaciones de café, algodón, azúcar y plátano, que son las que le dan al país casi la totalidad de sus divisas. Aunque el producto per cápita es de más de mil dólares por año, tres cuartas partes de la población ganan menos de trescientos dólares anuales. La mitad de la población carece de lo indispensable, y el nivel de desnutrición en Guatemala es el más alto de este hemisferio después del de Haití.

También en Guatemala como en El Salvador, el sector militar ha

servido para salvaguardar los intereses económicos y sociales del sector más privilegiado. El sector empresarial y el militar se unieron para impedir reformas, y así eliminar a los grupos de oposición legítimos, y para aterrorizar al pueblo, que se compone en su mayor parte de indígenas. La elección del presidente Cerezo, como en el caso del presidente Duarte, representa un cambio que debe recibir apoyo por parte de Estados Unidos. Pero dado el poder enraizado de la élite privilegiada y de las fuerzas armadas en Guatemala, no nos hacemos ilusiones de que perdure el éxito de Cerezo.

Sin embargo, si bien el sector militar obstruye a Cerezo en cuanto a su política interna, su política exterior ha mostrado ser más independiente. Cerezo tuvo un papel clave en la elaboración del acuerdo regional que constituye el convenio de Guatemala. Y también ha tomado la delantera en abogar porque se constituya un Parlamento Centroamericano, medida positiva que debe aplaudir Estados Unidos.

En Guatemala el Plan Arias ha conducido a un paso muy importante. El 7 de octubre de 1987 el gobierno de Cerezo entabló pláticas directas, por primera vez desde 1966, con los representantes de la guerrilla de izquierda. Por razones de seguridad las pláticas tuvieron lugar en un lugar no identificado en Madrid, España. Como era de esperarse, la reunión terminó tres días más tarde sin que se hubiera llegado a ningún acuerdo dada la distancia entre los grupos. Pero no será por culpa del Presidente que no se lleve a cabo en Guatemala el Plan Arias, sino por culpa de las profundas diferencias políticas que existen en esa nación. Los intereses creados, económicos y sociales de Guatemala no quieren la "paz"; lo que quieren es la victoria. Sin embargo, ya que poco se ha hecho para mejorar la inequidad social que fomentó la revolución, es probable que el movimiento guerrillero en Guatemala perdure. En consecuencia, no habrá ni paz ni victoria en mucho tiempo por venir.

En vista de que la ayuda militar de Estados Unidos a Guatemala sólo sumó tres millones de dólares este año, será difícil que Estados Unidos influya en los sucesos de ese país. Sin embargo, le propongo al Congreso y a este Comité que analicen con cuidado cualquier solicitud futura de ayuda militar o económica. Cualquier ayuda que se le otorgue a Guatemala deberá estar condicionada a que se respete sin ambages al gobierno democrático civil.

CONCLUSIONES

El mensaje que le quiero transmitir a este Comité es sencillo: el que exista un gobierno formalmente democrático no garantiza que haya una verdadera democracia. Nos gustaría pensar que en El Salvador y en Guatemala existe la democracia real, pero desafortunadamente no es cierto. Los dos países se rigen con democracias formales que esconden una organización política y social muy inequitativa, violaciones extremas de los derechos humanos, y muy poca apertura política para la oposición democrática.

El Plan Arias constituye un paso muy importante en la región porque representa el consenso, que va en aumento, de que la paz en Centroamérica sólo se podrá alcanzar si la región se inclina hacia la reconciliación nacional y hacia la democratización de sus sistemas políticos. Este paso es positivo para Estados Unidos y para Centroamérica. Aunque son limitadas las posibilidades de un éxito total del Plan Arias, Estados Unidos se podrá sustentar en los principios que ya ha asentado el Plan. En los próximos meses, cuando se haga el intento de poner en marcha el Plan Arias, así como en el futuro, Estados Unidos debe hacer lo posible por apoyar la desmilitarización de la región, fomentando el respeto por los derechos humanos, y estimulando la apertura política para todas las ideologías que se adhieran a las reglas de la democracia. Si el Plan Arias logra alcanzar siquiera algunas de sus metas, nos sentiremos satisfechos de que Centroamérica vaya por buen camino.

Traducción: *María Urquidi*